

COLINA, catorce de marzo del año dos mil veintidós.

VISTOS:

KARINA PAREDES TORRES, chilena, casada, cesante, cédula nacional de identidad número 11.994.933-5, domiciliada en calle Rubén Darío N°101, Población Inés Bustos, de la comuna de Lampa; dedujo una demanda en contra de su ex empleadora ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA, Rut: 69.071.400-0, representada legalmente por su Alcalde don Jonathan Enrique Opazo Carrasco, ambos con domicilio en Baquedano N°824 (964), de la comuna de Lampa.

Señala que inició relación laboral con la demandada el 1 de julio de 2008 y que en la práctica se trataba de una relación laboral porque había vínculo de subordinación y dependencia.

Explica que debía obedecer órdenes de su jefatura, cumplir horarios y desarrollar sus labores en el lugar designado por su ex empleador (distintas dependencias de la Municipalidad). Precisa que desempeñó funciones como secretaria por varios años en la DIDECO, luego fue secretaria de la Alcaldía y, en seguida, secretaria de la Jefa de Gabinete de la Alcaldesa. Añade que después fue derivada a la SECPLA (como Encargada de Subvenciones y Asesorías en esa materia a las Organizaciones Sociales), siendo este su último puesto de trabajo. Seguía instrucciones del Director Municipal Miguel Muñoz Verdugo, hasta que llegó la nueva administración de la Municipalidad. También dijo que dentro de sus tareas diarias estaba el atender público, derivar al área respectiva y hacer seguimiento a oficios, según instrucciones de su Jefe.

En cuanto a su horario de trabajo, dijo que era de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas y que no existía registro pero que su jefatura se encargaba de supervigilar el cumplimiento del horario establecido.

Revela que a partir del año 2017 hasta el año 2019, tuvo la calidad de “media contrata” por 22 horas semanales.

En cuanto a su remuneración, dijo que era por la suma total de \$1.180.124.



Se desempeñó por 13 años y 11 días para la demandada. El cargo era estable, permanente e indispensable dentro de la organización de la Municipalidad de Lampa; y cumplía a cabalidad las labores encomendadas.

Dijo que a pesar que su contrato señalaba como su función “apoyo administrativo en la dirección de secpla”, dijo que en la práctica debía cumplir con cualquier labor encomendada por su jefatura.

Su despido no contiene una causal, debiendo por ello ser declarado como injustificado. Además, reclama que no le fue pagada la totalidad de sus cotizaciones previsionales, que no pagó sus cotizaciones previsionales en AFP Modelo, Isapre Banmédica y Seguro de Cesantía por todo el periodo trabajado.

En cuanto el término de la relación laboral, dijo que el 12.7.2021 la Ilustre Municipalidad de Lampa procedió a desvincularla “por razones políticas”, ya que la actora había trabajado para la administración anterior y le pidió que se fuera de la oficina. Posteriormente recibió un Decreto que indicaba que se ponía término a su contrato, sin expresar causa legal.

Arguye que, las labores desarrolladas se hicieron bajo subordinación y dependencia, de manera que se debe desestimar cualquier alegación dirigida a entender que se daba la descripción del artículo 4° de la Ley (que se traten de labores accidentales; no sean habituales; para cometidos específicos). Sino que la relación se llevó a cabo fuera del marco legal que establece la Ley N°18.883, siendo aplicable la norma común y general en derecho laboral, y el Código del Trabajo en toda su extensión (según la definición de contrato de trabajo del artículo 7° del Código del Trabajo).

Insiste en que la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4° de la Ley 18.833, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales, contratadas por la administración del Estado. Y que -en la especie- lo que ocurre es que una Municipalidad, que ha suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, en realidad ese trabajador presta servicios en las condiciones previstas por el código del ramo.



Alega que el despido del que fue objeto sería nulo, porque la ley exige para que el despido surta sus efectos es necesario previamente acreditar el pago de las cotizaciones hasta el último día del mes anterior al del despido; y que, si ello no ocurre, no produce respecto del empleador el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Dijo que la demandada le adeuda cotizaciones de seguridad social correspondientes a las instituciones antedichas, y que correspondería hacer efectiva la sanción de nulidad del despido

En definitiva, pide que se declare la existencia de la relación laboral, entre el 1 de Julio del año 2008 y el 12 de julio de 2021, bajo las características que se derivan de la definición del artículo 7° del Código del Trabajo y, se condene a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

- Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de \$1.180.124.
- Indemnización por años de servicios por la suma de \$12.981.364.
- Recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicios (letra b) art. 168 del Código del Trabajo), por la suma de \$6.490.682.
- Feriado Legal y Proporcional correspondiente a los últimos dos años, por la suma total de \$1.652.174.
- Cotizaciones adeudadas durante todo el período que duró la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal.
- Remuneraciones que se deriven de la aplicación de los incisos 5, 6 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo (Ley Bustos), calculado sobre la base de la remuneración promedio de los últimos 3 meses (\$1.180.124).
- Sanción al empleador que no paga las cotizaciones del seguro de cesantía, en razón del art. 17 de la Ley 19.728, correspondiente al pago de 5 prestaciones de cesantía, por la suma de \$2.360.248.
- Reajustes e intereses.
- Costas del juicio.



El abogado Juan Sebastián Martínez Saldivia, **contestó la demanda** en representación de la demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA, solicitando su rechazo con costas.

Luego de reiterar el contenido de la demanda, expuso que -de acuerdo a los contratos de honorarios firmados por la demandante- la actora bajo ninguna circunstancia ejecutó labores que fueren más allá de lo acordado en cada uno de los contratos a honorarios celebrados entre las partes. Los servicios prestados fueron específicos y debidamente determinados en cada uno de los contratos suscritos, de manera que se encuentra en la hipótesis del artículo 4° de la Ley N° 18.883, toda vez que se trataría de una función o servicio específico; y porque se ha definido claramente cuál es su función o servicio específico en cada uno de los contratos a honorarios.

Destaca que, para la contratación a honorarios los servicios públicos -en general- se rigen por las directrices que indica el oficio circular N°78 de fecha 23.12.2002, el cual se encuentra contenido en las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, emitido por el Ministerio de Hacienda. Añade que de conformidad a dicho documento, procede la contratación a honorarios cuando exista una imposibilidad de ejecución directa de la prestación por parte de la institución pública, de manera que con sus recursos humanos propios no tenga la capacidad técnica o la disponibilidad temporal para ejecutar eficiente y oportunamente los trabajos encomendados.

Reclama que respecto del período 2017 al 2019, la actora manifestó estar vinculada a contrata; sin embargo, el período correcto sería el que va desde el 1.3.2016 al 30.6.2018.

Reprocha la demandada que, por este período (2016 al 2018), sería claro que la relación no es de carácter laboral sino que estatutaria y, por ende, no resultaría posible indicar que existe una continuidad en cuanto al vínculo desde el año 2008 hasta el 2021, ya que la naturaleza es distinta; iniciando en un contrato a honorarios desde el año 2008 hasta el 2015, continuando con una contrata durante el



año 2016 hasta el 2018, y finalizando desde el 2019 al 2021 con un contrato a honorarios.

Agrega que de conformidad a lo establecido en los artículos atinentes a la calidad de contrata de la ley N° 18.883, el solo vencimiento del plazo de dicha contratación produce el término de los servicios del empleado, sin necesidad de efectuar una manifestación expresa de voluntad por parte del alcalde, dirigida a expresar su decisión de no prorrogar el convenio.

Aclara que respecto de las cotizaciones de seguridad social relativas a este tipo de contratación, nada se le adeuda a la demandante, porque estaría todo pagado con anterioridad al término de su contrata. Expresa que así lo ha reconocido este Tribunal en causa rol O-77-2018.

Hace presente al Tribunal que el honorario bruto de la demandante era por la suma de \$1.180.124; y que luego se le pagó de forma líquida (descontado el impuesto a retener por boletas de honorarios de un 11,5%) por la suma de \$1.044.410. Y que este era el monto acordado por las partes y pagado mensualmente a la actora por la prestación de sus servicios (mes a mes) a su entera conformidad.

Señala que entre el Municipio y la demandante existió una sucesión de contratos a honorarios (de cometido específico), de acuerdo al siguiente detalle:

- Año 2009 “Atención y orientación a las mujeres en relación a los programas de oficina de la mujer”;
- Año 2012, “Administrativo programa puente”;
- Años 2013 y 2014, “Apoyo a la oficina DIDECO”;
- Año 2015, “Prestación de servicios en programas comunitarios”;
- Años 2019 y 2020, “Prestar servicios y apoyo a la Sra. Alcaldesa en el trabajo de contacto directo con la comunidad, a través de las organizaciones o caso a caso”; y
- Año 2021, “Apoyo administrativo en la dirección de Secpla”.



Agrega que los contratos suscritos contenían cláusulas tipo que regulaban los siguientes asuntos: vigencia del contrato, requisitos para la procedencia del pago y naturales del contrato.

Dijo que de la revisión de las cláusulas antedichas, queda de manifiesto en ellas que el contrato que fue firmado por la demandante, que se señala expresamente la naturaleza del contrato (honorarios), que se pactó la posibilidad de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las partes, y que la actora tenía la obligación de presentar un informe de mensual de las actividades desarrolladas.

En la especie, el contrato a honorarios fue suscrito el 6.1.2021 y con vigencia desde el 1.1.2021 hasta el 31.12.2021. este contrato agotó sus efectos conforme a la facultad contenida en el contrato y ejercida por el municipio.

Expresa que según lo ha ratificado la Contraloría General de la República, las personas contratadas a honorarios se rigen por el respectivo contrato y la normativa del contrato de arrendamiento de servicios del Código Civil (artículos 1915 y 2006 y siguientes). Agrega que son responsables de su desempeño, sólo ante los tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de las normas sobre rendición de cuentas; y, que están sujetos al principio de probidad administrativa, dado su carácter de servidores estatales.

En cuanto a la supuesta existencia de una contratación de prestación de servicios a honorarios, niega todos los argumentos señalados por la demandante tendiente a fundamentar una supuesta relación regida por las normas del Código del Trabajo y una supuesta nulidad del despido. Expresa que la demanda incoada no se ajusta a la verdad de los hechos ni a la realidad de la relación contractual que ligó a la Municipalidad de Lampa y la demandante.

La demandante y la Municipalidad fueron parte de una contratación bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios con cometidos específicos, regida por las normas de dicho contrato y –supletoriamente- por las normas del Código Civil.



Dijo que también se rige por la Ley N°18.695 (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades), la cual fija los lineamientos principales en el ámbito de la contratación de personal. Y, en lo pertinente, rige a su vez la Ley N°18.575 (sobre Bases Generales de Administración del Estado) y la Ley N°18.883.

La contratación materia de auto, no alude a un vínculo laboral (caracterizado por la existencia de una remuneración y una relación de subordinación o dependencia), sino más bien, se configuran los elementos de la prestación de servicios de honorarios civiles y debe por ello entenderse que el régimen jurídico aplicable es el establecido en el Código Civil, particularmente las normas relativas al denominado “contrato de arrendamiento de servicios inmateriales” (artículos 2006 y siguientes).

Asegura que la parte demandante no cumplía una jornada de trabajo ni firmaba registro de asistencia; y, que no tenía obligación de recibir instrucciones u órdenes para el cumplimiento de sus cometidos. Expresa que así lo reafirma la jurisprudencia, según fallos que indica.

Sostiene que de acuerdo a la Constitución Política las municipalidades se encuentran sometidas al control de la Contraloría General de la República (Art. 98 CPR) y que dentro de esta esfera de control ejercida por la Contraloría y en aras del principio de legalidad, juridicidad y probidad, dicho órgano emite dictámenes en orden a orientar y dirigir la actividad administrativa, resultando ser vinculantes. La Contraloría en sus dictámenes ha dicho que las partes deben regirse a lo establecido en cada convenio.

Finalmente, apuntó que durante el 1 de marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, la relación no es de carácter laboral sino que estatutaria y por consiguiente, no resulta posible aplicar sobre dicho periodo una naturaleza jurídica distinta y mucho menos indicar que existe una continuidad en cuanto al vínculo desde el año 2008 hasta el 2021.

En cuanto a las prestaciones demandadas, primeramente dijo que en la especie no existe una relación laboral. No reconoce la existencia de un despido



ilegal e injustificado, ni menos la nulidad del mismo, toda vez no existe razón jurídica para establecer que entre las partes se estableció una relación laboral.

Por la Indemnización sustitutiva del aviso previo, Indemnización por años de servicios y el incremento legal demandados por la actora, reclamó la improcedencia de ellas, dado que son indemnizaciones y prestaciones propias de una relación laboral, cuestión que en la especie no se configura.

Por el pago de cotizaciones previsionales en forma íntegra por el período trabajado, solicitó el total rechazo de esta pretensión. Dijo que nunca fue realizado ningún tipo de descuento del honorario pagado a la demandante, el que recibió íntegramente según lo pactado en el respectivo contrato de honorarios, no resultando ser plausible pretender cambiar la naturaleza jurídica del contrato, buscando incrementar su patrimonio de manera injustificada.

Por el pago de remuneraciones por la denominada “Ley Bustos” y la sanción del artículo 17 de la ley 19.728, pidió su rechazo.

Alega que la demandante, al recibir sus honorarios, emitía la respectiva boleta electrónica y la demandada procedía a la retención del 10%, de conformidad con la Ley de la Renta.

Por el pago del feriado legal y proporcional, solicitó el rechazo de dicho rubro por no tener la actora ese derecho, ya que nunca existió una relación laboral.

Por los reajustes, intereses y costas demandadas, pidió también el rechazo en atención a lo desarrollado en su contestación.

En cuanto a la terminación de la prestación de los servicios, dijo que la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de Carácter Civil de fecha 6.1.2021, indica: *“Sin perjuicio de esto la Municipalidad podrá poner término anticipado al presente contrato sin necesidad de expresión alguna de causa y sin que el prestador de servicios tenga derecho a indemnización alguna por este motivo, declarándolo así expresamente el (la) contratado(a).”* Luego la misma clausula indica *“En caso de que el contrato terminase anticipadamente, el*



prestador del servicio solo tendrá derecho al pago proporcional que corresponda a los servicios efectivamente prestados y aprobados por la Municipalidad, y aun así, no será retribuido aquel servicio que no resultase útil”.

Su representada Ilustre Municipalidad de Lampa, comunicó a la actora la decisión de poner término al contrato (en virtud de la facultad existente en la cláusula cuarta transcrita), a contar del 30.6.2021. Y que ello no constituye un despido, sino que únicamente el ejercicio de un derecho pactado entre las partes y que cualquiera de las dos podía ejercer en cualquier momento.

Añade que la demandante siempre estuvo en conocimiento de la naturaleza de los contratos y de la forma de pago de sus honorarios, cuestión que se refleja por la emisión de las respectivas boletas y de los informes mensuales, sin haber reclamado jamás la actora.

En cuanto a la teoría de la demandante en el sentido de aplicarse el “reenvío automático al Código del Trabajo”, dijo que la Ley 18.883 sólo establece la posibilidad de contratar personas regidas por el Código del Trabajo en tres situaciones: 1) Las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación; 2) El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad; y, 3) Los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos se regirán por la ley N° 15.076, en lo que respecta a remuneraciones y demás beneficios económicos, horario de trabajo e incompatibilidades.

La demandante no se encontraba en ninguna de estas tres opciones, las que están diseñadas de manera taxativa.

Y que, sobre el particular, la Contraloría General de la República ha señalado en dictamen N°015515 del año 1996 que las *“municipalidades pueden contratar personal acorde normativa del código del trabajo, siempre que se cumplan copulativamente los requisitos que establece ley 18.883 art/3 inc/1(...)”*



Solicitó tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes, con costas.

Con fecha 12.11.2021 tuvo lugar la audiencia preparatoria; y el día 7.3.2022 la de juicio.

CONSIDERANDO:

1º) Fueron fijados como hechos controvertidos del litigio:

a. Existencia de una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo. En la afirmativa, fecha de inicio, jornada, remuneración, funciones, fecha de término, causal aplicada; hechos y circunstancias que así lo acrediten.

b. Efectividad de ser injustificado y nulo el despido; hechos y circunstancias que así lo acrediten.

c. Procedencia de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas.

2º) La parte demandante se valió de la siguiente prueba en la audiencia de juicio:

DOCUMENTAL

a. Credencial Municipal de Karina Paredes Torres.

b. Certificado de incorporación de la demandante a AFC CHILE.

c. Certificado de incorporación de la demandante a AFP MODELO.

d. Certificado de incorporación de la demandante a ISAPRE BANMEDICA.

e. Set fotográfico.

f. Boletas de Honorarios números: 118, de 15.3.2016; 119, de 15.4.2016; 122, de 25.5.2016; 123, de 15.6.2016; 124, de 15.7.2016; 125, de 16.8.2016; 126, de 15.9.2016; 128, de 17.10.2016; 129, de 15.11.2016; 131, de 22.1.2017; 130, de 15.12.2016; 132, de 15.2.2017; 133, de 15.2.2017; 134, de 17.4.2017; 135, de 15.5.2017; 138, de 15.6.2017; 139, de 21.7.2017; 140, de 16.8.2017; 141, de 15.9.2017; 142, de 16.10.2017; 143, de 16.11.2017; 144, de 15.12.2017; 146, de 22.1.2018; 147, de 15.2.2018; 148, de 15.3.2018; 150, de



16.4.2018; 152, de 15.5.2018; 154, de 15.6.2018; 156, de 17.7.2018; 159, de 16.10.2018; 157, de 16.8.2018; 158, de 20.9.2018; 160, de 15.11.2018; 161, de 17.12.2018; 162, de 21.1.2019; 163, de 15.2.2019; 164, de 15.3.2019; 165, de 15.4.2019; 167, de 15.5.2019; 169, de 17.7.2019; 171, de 22.8.2019; 172, de 16.9.2019; 173, de 24.10.2019; 175, de 19.11.2019; 176, de 16.12.2019; 177, de 22.1.2020; 178, de 17.2.2020; 179, de 16.3.2020; 181, de 15.4.2020; 183, de 15.6.2020; 182, de 15.5.2020; 184, de 15.7.2020; 185, de 17.8.2020; 186, de 15.9.2020; 187, de 15.10.2020; 188, de 16.11.2020; 189, de 15.12.2020; 192, de 15.1.2021; 193, de 15.2.2021; 194, de 15.3.2021; 195, de 15.4.2021; 196, de 17.5.2021; 197, de 15.6.2021.

CONFESIONAL

No compareció el representante de la demandada.

La demandante solicitó hacer efectivo el apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo.

TESTIMONIAL

a. Rosa Angélica Pinto Herrera, CIN: 13.444.078-3.

b. Caterine Jara Cea, CIN: 15.119.685-3.

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

Pidió a la demandada exhibir todos los contratos de prestación de servicios celebrados por las partes.

Solicitó hacer efectivo el apercibimiento, respecto de los contratos no presentados de los años: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018.

3º) La parte demandada se valió de la siguiente prueba en la audiencia de juicio:

DOCUMENTAL

a. Decreto N° 34 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 1 de febrero de 2016.

b. Decreto N° 70 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 29 de abril de 2016.



c. Decreto N° 94 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 1 de agosto de 2016.

d. Decreto N° 166 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 14 de noviembre de 2016.

e. Decreto N° 213 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 30 de diciembre de 2016.

f. Decreto N° 358 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 30 de junio de 2017.

g. Decreto N° 554 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 29 de septiembre de 2017.

h. Decreto N° 31 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 02 de enero de 2018.

i. Decreto N° 220 Nombra a persona que indica en grado que señala, de fecha 29 de marzo de 2018.

j. Decreto N° 470 Pone término a decreto Alcaldicio que indica, de fecha 12 de julio de 2018.

k. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales de fecha 2 de septiembre de 2021.

l. Decreto Exento N° 13 de fecha 6 de enero de 2021. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

m. Decreto Exento N° 25 de fecha 22 de enero de 2020. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de fecha 20 de enero de 2020.

n. Decreto Exento N° 26 de fecha 21 de enero de 2019. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.



ñ. Decreto Exento N° 104 de fecha 04 de febrero de 2019. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

o. Decreto Exento N° 459 de fecha 22 de agosto de 2019. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

p. Decreto Exento N° 670 de fecha 23 de octubre de 2019. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

q. Decreto Exento N° 741 de fecha 19 de noviembre de 2019. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

r. Decreto Exento N° 430 de fecha 3 de julio de 2018. Reconoce contratos que indica.

s. Decreto Exento N° 185 de fecha 7 de abril de 2017. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

t. Contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de fecha 29 de septiembre de 2017.

u. Decreto Exento N° 104 de fecha 22 de enero de 2016. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

v. Decreto Exento N° 310 de fecha 5 de febrero de 2016. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de la misma fecha.

w. Decreto Exento N° 1000 de fecha 13 de mayo de 2016. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de fecha 11 de mayo de 2016.



x. Decreto Exento N° 1620 de fecha 2 de agosto de 2016. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de fecha 1 de agosto de 2016.

y. Decreto Exento N° 2284 de fecha 15 de diciembre de 2015. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de fecha 11 de diciembre de 2015.

z. Decreto Exento N° 617 de fecha 21 de abril de 2014. Reconoce contratos que indica.

a.a. Decreto Exento N° 1196 de fecha 01 de agosto de 2013. Reconoce contratos que indica y contrato de prestación de servicios a honorarios de carácter civil de fecha 25 de julio de 2013.

a.b. Informes de desempeño de contrato a honorarios, según el siguiente detalle:

- Informe de desempeño de fecha 16 de marzo de 2009.
- Informe de desempeño de fecha 24 de abril de 2009.
- Informe de desempeño de fecha 17 de agosto de 2009.
- Informe de desempeño de fecha 15 de octubre de 2009.
- Informe de desempeño de fecha 25 de enero de 2012.
- Informe de desempeño de fecha 15 de noviembre de 2012.
- Informe de desempeño de fecha 17 de diciembre de 2012.
- Informe de desempeño de fecha 15 de mayo de 2013.
- Informe de desempeño de fecha 17 de junio de 2013.
- Informe de desempeño de fecha 16 de abril de 2018.
- Informe de desempeño de fecha 15 de mayo de 2018.
- Informe de desempeño de fecha 17 de julio de 2018.
- Informe de desempeño de fecha 16 de octubre de 2018.
- Informe de desempeño de fecha 15 de noviembre de 2018.
- Informe de desempeño de fecha 17 de diciembre de 2018.
- Informe de desempeño de fecha 15 de febrero de 2019.



- Informe de desempeño de fecha 15 de marzo de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 15 de abril de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 15 de mayo de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 17 de junio de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 17 de julio de 2019.
- informe de desempeño de fecha 22 de agosto de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 16 de septiembre de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 24 de octubre de 2019.
- Informe de desempeño de fecha 16 de diciembre de 2019.
- informe de desempeño de fecha 16 de marzo de 2020.
- Informe de desempeño de fecha 15 de junio de 2020.
- Informe de desempeño de fecha 15 de septiembre de 2020.
- Informe de desempeño de fecha 15 de diciembre de 2020.
- Informe de desempeño de fecha 15 de marzo de 2021.

4º) Respecto de la continuidad de la relación contractual entre las partes, en su contestación la demandada reconoce que esta se inició con un contrato a honorarios desde el 2008 y hasta el 2015, luego de lo cual continuó con una contrata durante los años 2016 y 2018, para finalizar “desde el 2019 al 2021” con un contrato a honorarios.

Se advierte el afán de la Municipalidad por querer presentar una interrupción del vínculo entre los años 2016 y 2018, sin embargo, toda la documental acompañada pone de manifiesto que la contratación de la demandante fue continua desde el año 2008 y hasta su término el año 2021.

5º) Puede observarse en la prueba que si bien los decretos alcaldicios 34, 70, 94, 166, 213, 358, 554, 31, 220 y 470, indican que la demandante prestó servicios para la municipalidad por 22 horas semanales, mediante la modalidad de *contrata* a contar del 1.3.2016 y hasta el 30.6.2018, el resto de la prueba documental acredita que en ese mismo período la demandante, además, le prestó servicios a través de contratos a honorarios.



Las boletas 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 13, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, cada una por los meses que comprenden el período desde marzo de 2016 a junio de 2018, son la mejor demostración de que hubo una continuidad en la prestación de servicios a honorarios, cuestión que aparece además corroborada por los decretos alcaldicios 1000, 1620 y 185, de fechas 11 de mayo de 2016, 1 de agosto de 2016 y 7 de abril de 2017, en virtud de los cuales fueron reconocidos algunos contratos del período.

En el mismo sentido se pueden citar los contratos de 22 de enero, 5 de febrero, 11 de mayo, 1 de agosto de 2016, 7 de abril y 29 de septiembre de 2017; y los informes de desempeño de mayo y junio 2018.

Cabe reiterar que en el caso de la demandante, la contrata fue prevista para la prestación de 22 horas de servicios a la semana, permitiendo la compatibilidad de la jornada parcial (como lo autoriza el artículo 2 de la Ley 18.883) con la contratación a honorarios.

Por consiguiente, está fuera de dudas que hubo continuidad en la vinculación contractual que existió entre las partes, desde el año 2008 y hasta el año 2021, sin perjuicio de que durante un período de 2 años y 3 meses, además, las partes estuvieron relacionadas por un vínculo estatutario de la Ley 18.883.

6º) De acuerdo a los informes de desempeño presentados por la demandada, de marzo, abril, agosto y octubre 2009, enero, noviembre y diciembre de 2012, mayo y junio 2013, se puede tener por demostrado que la demandante realizó las siguientes funciones para la demandada: ejecución de llamadas telefónicas a monitoras, dirigentes y grupos de mujeres, entrega de información a mujeres de los programas que existen en la Oficina, atención de público, orientación de las personas, reuniones con la encargada de Oficina de la Mujer, llamadas a las monitoras, inscripción para talleres de la Oficina de la Mujer, elaboración de documentación (memos, ordinarios, guías de pedido), confección de contrato del personal nuevo, reunión semanal con director de DIDECO, recibir números de



atención de oficina OIRS, preparar documentación del Programa Puente (memos, oficios, solicitudes de contratos, llevar la agenda de directora).

En todos estos informes aparece estampada la firma y el timbre de la directora de DIDECO.

A su vez, los informes de desempeño de abril, mayo, julio, octubre, noviembre, diciembre de 2018, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre del año 2019, indican que las labores realizadas por la demandante consistieron en trabajo administrativo, despacho de correspondencia, participar en audiencias y actividades de la alcaldesa, atención de público, atención telefónica, inscripción y llamados para audiencias con la alcaldesa, certificar compras de gabinete, recepción y revisión de formularios, contactos con las organizaciones, documentación (memos, oficios, certificados), atención de casos derivados de la alcaldía, gestionar actividades y eventos municipales, llamar para audiencias con alcaldesa, registro de audiencias, registro de correspondencia, gestionar actividades y eventos municipales, gestión administrativa de subvenciones y fondos concursables,

La mayoría de estos informes llevan la firma y el timbre del Administrador Municipal, salvo los de octubre, noviembre y diciembre de 2018, que llevan el timbre y firma del director de SECPLA y el de diciembre 2019, que lleva el timbre de Gabinete

Los informes de marzo y diciembre de 2020 señalan las siguientes labores ejecutadas por la demandante: revisión de cartas y solicitudes de vecinos, atención de casos derivados de la alcaldía, visitas domiciliarias de la alcaldía, realizar certificados, memos, oficios, realizar llamadas para audiencias con alcaldesa, llevar el registro de audiencias, registro de correspondencia, inscripción de audiencia de la alcaldesa, gestión de beneficios sociales, contactar becados 2020, apoyo en entrega de becas.

En estos informes se señala que el supervisor de las labores es el Administrador Municipal.



El informe de marzo 2021 indica que las actividades realizadas por la demandante consistieron en atención de público, atención de llamadas telefónicas, llevar planilla Excel con información de documentos internos, como memos, oficios y certificados.

En este informe se señala que el supervisor de las labores es el Administrador Municipal.

7º) Por otro lado, consta en el contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito por las partes, de fecha 25 de julio de 2013, que la demandante se obligó a realizar para la demandada la función de Apoyo a la oficina dirección DIDECO; y que en los contratos de 11 de diciembre de 2015, 22 de enero, 5 de febrero, 11 de mayo, 1 de agosto de 2016, 7 de abril, 29 de septiembre de 2017, 21 de enero, 4 de Febrero, 22 de agosto, 23 de octubre y 19 de noviembre de 2019, 20 de enero de 2020, las partes convinieron que la demandante efectuaría los siguientes servicios para la municipalidad: prestar servicio y apoyo a la señora alcaldesa en el trabajo de contacto directo con la comunidad a través de organizaciones, o caso a caso.

Además, en el contrato de fecha 6 de enero de 2021, la demandante se comprometió a ejecutar la función de apoyo administrativo en la dirección de SECPLA.

8º) Complementan la información que proporcionan los documentos anteriormente indicados los decretos alcaldicios que incorporó la demandada.

Así, de acuerdo a los decretos 1196 y 617, la alcaldesa de la municipalidad de Lampa reconoció los contratos de prestación de servicios, suscritos el 25 de julio y el 31 de julio de 2013, y el 15 de abril de 2014, en virtud de los cuales la demandante realizaría la labor de apoyo a la oficina dirección DIDECO; en conformidad a los decretos 2284, 310, 1000, 1620 y 185, la alcaldesa de la municipalidad de Lampa reconoció los contratos de prestación de servicios suscritos el 11 de diciembre de 2015, 5 de febrero de 2016, 11 de mayo de 2016, 1 de agosto de 2016, 7 de abril de 2017, en virtud de los cuales la demandante



realizaría la prestación de servicios y apoyo a la señora alcaldesa en el contacto directo con la comunidad, a través de organizaciones o caso a caso; en conformidad al decreto 430, la alcaldesa de la municipalidad de Lampa reconoció el contrato de prestación de servicios suscrito el 3 de Julio 2018, en virtud del cual la demandante realizaría la labor de gestión administrativa en el gabinete municipal; de acuerdo a los decretos 26, 104, 459, 670, 741 y 25, la alcaldesa de la municipalidad de Lampa reconoció los contratos de prestación de servicios de 21 de enero de 2019, 4 de Febrero 2019, 22 de agosto de 2019, 23 de octubre 2019, 19 de noviembre de 2019 y 20 de enero 2020, en virtud de los cuales la demandante realizaría la labor de prestación de servicios y apoyo a la señora alcaldesa en el contacto directo con la comunidad, a través de organizaciones o caso a caso.

9º) Todas estas labores descritas guardan concordancia con las que la demandante alega haber efectuado en su demanda, como secretaria de DIDECO, secretaria de la alcaldía, secretaria de la Jefe de Gabinete y en SECPLA.

Además, como la parte demandada no cumplió con la carga de comparecer a través de mandatario a la prueba confesional, sin haber entregado una justificación por su rebeldía respecto del trámite, se puede tener como tácitamente admitido por ella que en su relación contractual la demandante desempeñó funciones como secretaria en diversas secciones, oficinas, unidades o departamentos de la Municipalidad de Lampa.

10º) Ahora bien, el artículo 4 de la Ley 18.883, permite a las municipalidades contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad y también, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Se ha entendido que las "labores accidentales y no habituales de la municipalidad" son aquellas circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y los cometidos específicos consisten en labores puntuales o claramente determinadas en el tiempo y perfectamente



individualizadas, y que, excepcionalmente –pero no de modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal.

11º) En el presente caso, los informes de desempeño reflejan tareas directamente de cargo de las municipalidades, sea ejecutadas a través de sus departamentos o unidades de gestión (Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA, Administrador Municipal) o mediante las actividades propias de su alcaldesa.

Como se trata de tareas de apoyo administrativo en la gestión de las funciones propias de la municipalidad y de su autoridad máxima, no puede sostenerse que hayan sido accidentales, o que la demandante haya prestado servicios o cometidos específicos u ocasionales. Es posible entender que las labores municipales referidas se hallan comprendidas en aquellas mencionadas en los artículos 21, 22, 56 y 63 de la LOC de Municipalidades.

12º) Se encuentra probado entonces que la contratación de la actora se efectuó fuera de los márgenes previstos en el artículo 4 de la Ley 18.883, por lo que atendidas las alegaciones planteadas en la demanda, corresponde determinar si en la relación contractual que hubo entre las partes se dieron los elementos que tipifican el contrato laboral, desde el momento que en conformidad con el artículo 8 del Código del Trabajo toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 7 (del mismo cuerpo legal), hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

13º) La naturaleza de las tareas efectuadas por la demandante para la Municipalidad de Lampa permite inferir que la prestación de los servicios lo fue bajo subordinación y dependencia, ya que no existe ningún elemento probatorio que lleve a pensar que la demandante era autónoma en la definición de su quehacer diario.

No se trata de alguien que haya puesto una especialidad o conocimientos específicos a disposición de la demandada.



Las labores de secretariado, que de por sí implican efectuar tareas de apoyo y soporte a una jefatura o unidad organizativa, requieren la impartición de órdenes, directrices, instrucciones y orientaciones de parte de un tercero.

Como elementos de corroboración de lo dicho se pueden mencionar los testimonios de Rosa Pinto y Catherine Jara. La primera aseveró que conoció a la demandante el año 2009, como secretaria de DIDECO. Explicó que era el director el que indicaba lo que tenía que hacer, en general, el “papeleo” de secretaria, como memos o agendar reuniones, etc. Acotó que la demandante después fue secretaria de la alcaldesa, del Gabinete y de SECPLA, siendo sus jefes directos la alcaldesa, la Jefa de Gabinete, Paola Acevedo y Miguel Muñoz.

Señaló la testigo que lo anterior lo supo porque ella trabajó en la Municipalidad de Lampa, como “territorial” de organizaciones comunitarias y como tal, tenía reuniones en el gabinete, con la alcaldesa y en SECPLA.

Catherine Jara dijo que ella trabajó en la Oficina de la Mujer los años 2008 y 2009 y que en ese período la demandante cumplió funciones de secretaria y apoyo de la jefa Gisella Plaza, quien le daba las instrucciones. Señaló además que la demandante fue secretaria en DIDECO.

Todo lo dicho permite afirmar que la oportunidad, conveniencia y mérito de estas actividades no estaba entregada a la discrecionalidad de la actora sino que estaba determinada por las decisiones de los encargados y jefaturas de las diversas secciones administrativas en las que se desempeñó.

14°) Si bien no hay prueba para acreditar que la demandante debía cumplir un horario de trabajo y registrar su asistencia, concurren los elementos fundamentales para aseverar que, más allá de la formalidad que muestran los contratos de prestación de servicios a honorarios, existió en los hechos una vinculación laboral, ya que hubo continuidad en la contratación, prestación de servicios personales y el pago de una retribución periódica y estable en dinero por esos servicios, como lo demuestran las boletas de honorarios acompañados.



Cabe mencionar además que en todos los contratos se indica que la contratada deberá prestar sus servicios personales y encontrarse a disposición de la municipalidad de acuerdo al supervisor del contrato.

15º) En cuanto a la fecha de inicio de la relación contractual, la demandante sostiene que ella corresponde al 1.7.2008, lo que se tendrá por tácitamente admitido por la demandada –como efecto de la confesional ficta.

Y en cuanto al término, la demandada admite que le puso fin en forma anticipada al contrato de fecha 6.1.2021, a partir del 30.6.2021, prevaleciéndose de la cláusula cuarta del instrumento referido, hecho que comunicó a la demandante. Por consiguiente, será esta última la fecha de separación de la trabajadora.

Por consiguiente, por haber existido un contrato de trabajo, la demandada tendría que haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código laboral, noticiando por carta o personalmente la causal legal correspondiente, cosa que no hizo, de modo que en los hechos hubo un despido sin justificación y sin acatamiento de las formalidades legales.

16º) Al ser injustificado el despido de la demandante la demandada deberá pagar a la actora la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por los 11 años de servicios, incrementada esta última en un 50%, conforme lo dispone la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo.

Las partes coinciden en que se pagaba a la actora un honorario de \$1.180.124, cuestión que además avalan las boletas del año 2021, por lo que será esta cantidad la que se tendrá como remuneración para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo.

17º) La demandada admite que nunca hubo un descuento por concepto de cotizaciones previsionales.

El certificado PREVIRED solo acredita el pago de las cotizaciones correspondientes al período en que la demandante prestó servicios a contrata (marzo de 2016 a junio de 2018), por el sueldo recibido.



Procede entonces ordenar el pago por el período que duró la relación laboral, debiendo utilizarse como remuneración imponible, el monto que mes a mes fue pagado por honorarios a la demandante entre los años 2008 y 2015.

Respecto de las cotizaciones del año 2016, la remuneración imponible que deberá emplearse para su cálculo es de \$573.514; respecto de las cotizaciones del año 2017, la remuneración imponible es de \$594.959 para los meses de enero a mayo y de \$784.803, para los de junio a diciembre; respecto de las cotizaciones del año 2018, para los meses de enero a julio, la remuneración imponible es de \$804.422 y para los meses de agosto a diciembre, de \$1.080.000; respecto de las cotizaciones del año 2019, la remuneración imponible es de \$1.117.800; respecto de las cotizaciones del año 2020 la remuneración imponible es de \$1.149.098 y; respecto de las cotizaciones del año 2021, la remuneración imponible es de \$1.180.124.

Las cotizaciones deberán ser pagadas en las instituciones previsionales correspondientes.

18º) En lo relativo al feriado, considerando que la demandada no probó que la trabajadora hizo uso de aquel y que niega la relación laboral, quedará condenada a su pago, para lo cual se tiene presente que los 2 últimos períodos anuales le dan cada uno derecho a 15 días hábiles de feriado, equivalentes en total a 42 días de remuneración, esto es, a \$1.652.174.

19º) Se negará lugar a la demanda en lo que relativo a la denominada nulidad del despido, por cuanto si bien las cotizaciones no estaban pagadas al momento de la separación de la trabajadora, dicha omisión de pago fue adoptada por la Municipalidad sobre la base de que no existía una vinculación laboral, habiendo actuado amparada además en la presunción de legalidad que le acuerda la Ley 19.880. Cabe añadir que la demandada no ha podido convalidar el despido, dada la falta de pronunciamiento condenatorio.

20º) La prueba rendida ha sido analizada y valorada de conformidad a lo establecido en el artículo 456 del Código del Trabajo, no alterando aquella no analizada



pormenorizadamente en nada lo resuelto en el presente fallo, pues la misma ha devenido en sobreabundante o irrelevante con relación a hechos que se han tenido como suficientemente establecidos en este juicio.

No se aplicará el efecto procesal por la falta de exhibición de la documental, por innecesario, al resultar acreditada con el resto de la prueba del juicio la relación laboral en la forma en que se ha determinado en esta sentencia, pero principalmente, porque es deber del juez ponderar toda la prueba, su conexión, concordancia, gravedad y precisión, y no solamente detenerse en un medio de prueba en particular.

Y con relación a la confesional ficta, en el cuerpo de esta sentencia consta que se ha aplicado el efecto procesal cuando ello se ha estimado procedente.

Y visto además lo establecido en los artículos 1, 3, 7, 8, 9, 162, 420, 454 N° 1° y 456 y siguientes del Código del Trabajo; y las pertinentes del Código de Procedimiento Civil:

I. **ACOJO** la demanda interpuesta, **SOLO EN CUANTO** declaro que existió una relación laboral entre la demandante Karina Paredes Torres, RUN 11.994.933-5 y la demandada Ilustre Municipalidad de Lampa, RUT 69.071.400-0, entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2021, la que terminó mediante un despido injustificado. En consecuencia, queda condenada la demandada a pagarle:

- 1) \$1.180.124, como indemnización sustitutiva del aviso previo;
- 2) \$12.981.364, como indemnización de los años de servicios;
- 3) \$6.490.682, por concepto de recargo del 50% de la suma recién anotada;
- 4) \$1.652.174, por compensación del feriado;
- 5) las cotizaciones previsionales, según lo indicado en el numeral 17°.

II. Las cantidades recién expresadas deberán ser pagadas con los reajustes e intereses legales.

III. **RECHAZO** en lo demás la referida demanda.

IV. **LIBERO** del pago de las costas a la parte demandada, por no resultar totalmente derrotada.



**NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO la presente
sentencia a las partes.**

Regístrese, anótese y en su oportunidad, archívese.

RIT O-328-2021.

**Dictada por Cristián Rodrigo Marchant Lillo,
Juez del Juzgado de Letras de Colina.**



STNKYNXVB

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>